



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I
FSA 2363/2017/55/CA33

Salta, 13 de agosto de 2021.

Y VISTA:

Esta causa nro. **FSA 2363/2017/55/CA33** caratulada: **“López, Eduardo Daniel s/ legajo de prórroga de prisión preventiva”**, originaria del Juzgado Federal de Tartagal; y

RESULTANDO:

1) Que llegan las actuaciones en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial de Eduardo Daniel López en contra del auto del 22/6/21 (firmado por el juez el 24/6/21) por el que se dispuso la prórroga de su prisión preventiva por el término de 60 días, a contar desde el 23/6/21 (fijando su vencimiento el 22/8/21).

Se agravia la defensa por considerar que el juez dispuso la prórroga sin acreditar la existencia de peligro real de fuga u obstaculización del proceso. Agrega que la elevada escala penal del delito endilgado no es suficiente para presumir que su asistido eludirá el accionar de la justicia.

Señala que las demoras acontecidas en la tramitación de la causa no deben pesar sobre su asistido, quien lleva más de dos años de detención cautelar; y que la complejidad de la investigación aducida por el magistrado no puede ser óbice para que López recupere su libertad.

Ante esa Alzada, la defensa oficial solicitó que se tenga por fundado el recurso con los argumentos expuestos por su par de la instancia anterior, agregando que no se



observan diligencias pendientes que justifiquen la demora en elevar la causa a juicio, y que no existe responsabilidad atribuible a su asistido en ese sentido.

Finalmente, considera que deben ser tenidas en cuenta otras medidas menos restrictivas y lesivas para los derechos de su pupilo que la prisión preventiva.

2) Que el Fiscal General se pronuncia por el rechazo del recurso, resaltando la gravedad de la pena prevista para el delito atribuido a López -transporte de más de 63 kilos de cocaína-, así como la cantidad de personas intervinientes y la complejidad de la pesquisa, todo lo cual aconseja el mantenimiento del encierro cautelar como único medio idóneo para asegurar su presencia en el inminente juicio que se llevará a cabo.

3) Que las actuaciones principales de las que se desprende este incidente se originaron el 23/2/17 a raíz de una denuncia efectuada por una persona que no quiso aportar sus datos, en la que se puso en conocimiento de la Gendarmería Nacional que existiría una organización dedicada a introducir estupefacientes desde el Estado Plurinacional de Bolivia hacia nuestro país (cfr. fs. 1/2 de la causa principal N° FSA 2363/2017).

Las diversas tareas de campo e investigativas llevadas a cabo por la prevención culminaron -en lo que a esta incidencia interesa- con la detención de Eduardo Daniel López el 25/3/19 mientras circulaba en una camioneta Volkswagen Amarok junto a José Hermogen Lencina, en la que se encontró un total de 63 kilos y 509 gramos de cocaína ocultos en los laterales





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I
FSA 2363/2017/55/CA33

de la caja, por lo que fue procesado con prisión preventiva como autor del delito de transporte de estupefacientes, auto confirmado por esta Sala en el legajo N° FSA 2363/2017/19.

4) Que el 21/10/20 en el expediente principal N° FSA 2363/2017, ante reiterados pedidos de la defensa oficial, se corrió vista al fiscal en los términos del art. 346 del CPPN, quien se opuso el 3/11/20 a la elevación de la causa a juicio por considerar incompleta la instrucción respecto a los imputados López, Lencina, Alcoba, Ángel Ortiz, Aldo Ortiz y Aniceto Ortiz; solicitando nuevas medidas de prueba (cfr. fs. 3018).

Asimismo, cabe mencionar que el 6/7/21, luego de que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió declarar inadmisibile el recurso deducido contra el auto de este Tribunal del 4/2/21 (mediante el que se confirmó la denegatoria del pedido de prisión domiciliaria de Eduardo Daniel López y se dispuso encomiendas para ser instruidas al juez de grado), esta Sala ordenó al magistrado que proceda a la clausura de la investigación respecto de quienes, contando con procesamiento firme el Ministerio Público Fiscal no había solicitado nuevas medidas investigativas, considerando especialmente la situación de aquellos que se encuentran privados de su libertad, por lo que se exhortó a que se eleve la causa al plenario con la máxima celeridad posible.

Finalmente, habiéndose dado cumplimiento el 29/6/21 con las medidas encomendadas por el agente fiscal, se dispuso -el 2/8/21- la elevación a juicio respecto



de Eduardo Daniel López, José Hermogen Lencina, Alberto Alcoba, Melisa Guillermina Isabel Graneros, Julia Guillermina González, Juan Carlos Alba, Aniceto Ortiz, Ángel Ortiz, Aldo Helbecio Ortiz, Miguel Palma, Francisco Reyneris Houllmann, Juan Ramón Campos y Nelson Iván Paniagua, encontrándose la causa -respecto de todos ellos- radicada ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta (cfr. constancias del sistema Lex100).

CONSIDERANDO:

1) Que, ante todo, interesa puntualizar que en incidencias análogas a la presente, en las que la causa principal se encontraba ya en el tribunal de juicio, esta Sala consideró que había perdido la jurisdicción para decidir en razón del riesgo en el que se podía incurrir de producirse decisiones contradictorias o una interferencia jurisdiccional indebida por parte de quien se desprendió de la causa y, consecuentemente, no solo había transferido hacia otro Tribunal el ejercicio de la jurisdicción, sino que, a raíz de ello, carecía ya de *imperium* para ejecutar las decisiones que se le reclamaban (cfr. in re “Incidente de prisión domiciliaria de Guzmán, Ariel Marcelo” del 19/5/16; “González, Robert Ricardo s/ inc. de excarcelación” del 16/4/19; entre otras).

Sin embargo, dicho criterio fue dejado sin efecto por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal en la causa “Assef, Manuel Fernando s/ recurso de casación” resuelta el 25/8/16, lo que fue compartido por la mayoría de las salas de ese Tribunal (cfr. Sala II “Tobares, María Elena s/ recurso de casación” del 20/5/16; Sala III, “Duran Moreno, Luis Carlos s/ recurso de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I
FSA 2363/2017/55/CA33

casación” del 10/5/16, y Sala IV voto mayoritario en “Nieva, María Celeste s/ recurso de casación” del 15/7/16 y “Guzmán, Ariel Marcelo s/ recurso de casación” del 9/9/16).

En este sentido, constante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia tiene dicho que sus sentencias no son vinculantes ni obligatorias fuera de los casos contenciosos que resuelvan, más entrañan una sujeción moral, de modo que los restantes tribunales pueden apartarse de sus precedentes a condición de suministrar fundadas razones que justifican tal temperamento (Fallos: 307:1094, entre otros).

Lo dicho es aplicable a los tribunales inferiores de esta jurisdicción respecto de las resoluciones de esta Cámara y a este Tribunal en relación con las de la Cámara Federal de Casación Penal, siempre que se verifique una plataforma fáctico-jurídica sobre la cual se haya fijado una posición inequívoca en numerosos precedentes, pues los tribunales de alzada desempeñan una función normofiláctica en materia de interpretación que contribuye a evitar innecesarias o groseras contradicciones entre los tribunales inferiores y, además, un inútil desgaste jurisdiccional que, en definitiva, conspira contra la garantía de la defensa en juicio y la seguridad jurídica, proposiciones ambas de inequívoco rango constitucional (cfr. esta Cámara in re “Bustamante, Luis Rodolfo s/incidente de excarcelación”, expediente N° 52000970/2009/7, del 12/10/16, “Panique, Adrián Darío s/ incidente de prisión domiciliaria”, expediente N° 27941/2019/13/CA8, del 5/3/21, “Lázaro Achu,



Juancito s/incidente de excarcelación”, expediente N° 14376/2018/1/CA3, del 13/5/21 e “Incidente de prisión domiciliaria de Orellana, José Antonio s/ infracción ley 23.737”, expediente N° 17388/2019/13/CA13, del 22/7/21, entre otros).

Sobre tales bases, y dejando a salvo la referida opinión negativa de esta Alzada mantenida en diversos precedentes en relación con este tema, por imperio de la doctrina mayoritaria del Tribunal *ad quem* precedentemente aludida, corresponde analizar la cuestión planteada en autos.

2) Que, sentado ello, cabe reparar que la ley n° 24.390, modificada por ley n° 25.430 -que se proclama como reglamentaria del artículo 7, inciso 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos- estableció (artículo 1°) un plazo máximo de dos años de encierro cautelar para las investigaciones que no alcancen el dictado de una sentencia, facultando al órgano jurisdiccional a prorrogar ese tiempo hasta por un año más en caso de que la cantidad de los delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de la causa hayan impedido el dictado del fallo en el plazo indicado.

Es que “la afectación a la garantía de ser juzgado sin dilaciones indebidas se encuentra limitada a la demostración de lo irrazonable de esa prolongación” (Fallos: 330:4539 y 333:433), pues -como se sabe- en la materia no rigen plazos automáticos ni absolutos. Antes bien, “la duración razonable de un proceso depende en gran medida de diversas circunstancias propias de cada caso, por lo que el derecho a ser juzgado sin





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I
FSA 2363/2017/55/CA33

dilaciones indebidas no puede traducirse en un número de días, meses o años” (Fallos: 322:360 y 327:327).

Así, de conformidad con lo que autoriza la ley, se concluye que el órgano jurisdiccional se encuentra facultado a superar ese límite temporal de encierro siempre y cuando el análisis de las circunstancias objetivas y subjetivas lleven a configurar un estado de sospecha razonable sobre la persistencia de riesgos procesales de elusión o destrucción de la prueba.

3) Que, en ese marco, debe recordarse que esta Sala el 21/8/19 rechazó la excarcelación solicitada a favor de López (incidente N° 2363/2017/1/CA2) y, luego, al confirmar su procesamiento con prisión preventiva el 21/5/20, así como al denegar su solicitud de prisión domiciliaria el 4/2/21, se consideró que las circunstancias ponderadas en aquella oportunidad no habían variado a su favor; lo que se reiteró el pasado 13/5/21 al homologarse parcialmente la anterior prórroga de su prisión preventiva (incidente N° 2363/2017/55/CA27) y el 17/5/21 cuando tampoco se falló a su favor en relación a una nueva solicitud de excarcelación (incidente N° 2363/2017/1/CA29).

En dichos resolutivos se desestimó su soltura o la morigeración de su detención teniéndose en cuenta la gravedad del delito endilgado -transporte de estupefacientes- que, por su penalidad, no permitiría que su eventual condena sea de ejecución condicional (en los términos del art. 26 del CP y de conformidad con el art. 221 del CPPF), valorándose además la



modalidad delictiva y la cantidad de tóxico que se le atribuye haber transportado (63 kilos y 509 gramos de cocaína); circunstancias que en esta ocasión, también se mantienen incolumnes.

4) Que en tal escenario, e ingresando en el análisis de los motivos que justifican la prórroga de la prisión preventiva, no debe soslayarse, en contraste con las pautas que establece el art. 1 de la ley 25.430, la especial complejidad de la causa, la cual consta de 20 cuerpos con más de 3.800 fojas y que, además, dio lugar a nuevas actuaciones complementarias y más de 60 incidentes; y de cuyo análisis global surgió la responsabilidad provisoria de López, entre otros imputados.

Asimismo, tras su detención y la de sus consortes de causa, se formaron actuaciones complementarias (FSA 2363/2017/26) en las que se encuentran procesadas otras ocho personas por el delito de asociación ilícita (Aniceto Ortiz, Ángel Ortiz, Aldo Helbecio Ortiz, Miguel Palma, Fidel Palma, Juan Ramón Campos, Francisco Reyneris Houllmann y Nelson Iván Paniagua) lo que, a su vez, dio origen a una tercer pesquisa en la que se procesó a Rubén Egidio Pintos, Norberto Benavides y Alberto Quintin Jaime por el delito de estafa procesal en grado de tentativa, el primero, y por lavado de activos en grado de partícipes necesarios, los dos últimos, auto que fue anulado por esta Sala el 30/4/21 (cfr. causa FSA 2363/2017/26/1), existiendo además otras personas que aún no fueron identificadas (y otras que se dieron a la fuga); por lo que encontrándose otros individuos que podrían facilitarle a López -estando en libertad- los medios necesarios para





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I
FSA 2363/2017/55/CA33

que se ausente de la jurisdicción del Tribunal, entorpezca las averiguaciones, o bien, con su fuga, impida la realización del juicio; reunidos especialmente los indicadores de riesgo procesal que surgen de la actuación principal, el delito atribuido, su injusto, alta penalidad y complejidad de la maniobra -lo que se erige como un factor que tiene efecto inmediato en el tiempo que ha insumido la instrucción-, se justifica la prórroga del encierro cautelar que viene sufriendo el nombrado.

5) Que, por otra parte, no se soslaya que – tal como lo señala la defensa- el pasado 13/5/21 este Tribunal al confirmar la anterior prórroga de la prisión preventiva de López redujo el plazo dispuesto por el instructor a 90 días. Sin embargo, el objeto de dicha modificación fue instar a que se eleve la causa a plenario con la máxima celeridad posible (en línea con la exhortación que se realizó el 6/7/21), lo que -como se dijo- ya aconteció respecto del aquí imputado el pasado 2/8/21.

6) Que, por ello, se concluye que la prórroga por sesenta (60) días de la prisión preventiva de Eduardo Daniel López se asentó sobre bases objetivas y posee fundamento suficiente en orden a asegurar su sujeción al inminente juicio oral y público que se llevará a cabo en su contra por el delito atribuido.

Por lo expuesto, y en concordancia con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General, se

RESUELVE:

I.- RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial de Eduardo Daniel López y, en su



mérito, **CONFIRMAR** la prórroga de la prisión preventiva dictada en su contra.

II.- DEVOLVER las presentes actuaciones al Juzgado de origen.

III.- REGÍSTRESE, notifíquese y publíquese en los términos de las Acordadas N° 15 y 24 de la CSJN.

MAJ

Ante mí:

Fecha de firma: 12/08/2021

Alta en sistema: 17/08/2021

Firmado por: LUIS RENATO RABBI BALDI CABANILLAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ERNESTO SOLA ESPECHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARTIN GOMEZ DIEZ, SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: SANTIAGO FRENCH, JUEZ DE CAMARA



#35362351#298461874#20210812142218577